


**SALA ELECTORAL y de COMP.ORIGINARIA -  
TRIBUNAL SUPERIOR**

Protocolo de Autos

Nº Resolución: 124

Año: 2018 Tomo: 3 Folio: 839-844

EXPEDIENTE: 5900046 -  - RYL SRL C/ AMX ARGENTINA S.A. (CLARO) AMPARO - RECURSO  
DIRECTO (CIVIL) - RECURSO DIRECTO

**AUTO NUMERO:** 124. CORDOBA, 28/12/2018.

**Y VISTOS:** Estos autos caratulados: "**RYL SRL C/ AMX ARGENTINA SA (CLARO) – AMPARO – RECURSO DIRECTO (CIVIL)**" (expte. SAC n° 2612998/36) - Hoy Expte. N° 5900046 -

**DE LOS QUE RESULTA:**

**1.** RYL SRL, por intermedio de su Socio Gerente, compareció a fs. 73/88 e interpuso recurso directo en procura de obtener la admisión del recurso de casación deducido en contra de la Sentencia número Sesenta y siete, dictada por la Cámara de Apelaciones en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación de esta ciudad con fecha 4 de junio de 2013 (fs. 47/51), y que fuera denegado por Auto Trescientos cincuenta y ocho de fecha 6 de septiembre de ese año (fs. 70 y vta.).

**2.** Impreso a f. 90 el trámite de ley y notificada la entonces Sra. Fiscal Adjunta de la Provincia mediante providencia de fecha 11 de octubre de 2013, se dicta el decreto de autos (f. 92), el que firme, deja la causa en estado de ser resuelta.

**3.** Luego de afirmar el cumplimiento de los recaudos formales del recurso entablado, y realizar un relato de los hechos de la causa, expone sus críticas al auto que deniega el recurso deducido, al que acusa de no considerar la posición de su parte ni los argumentos vertidos en pos de la procedencia del recurso planteado.

Esgrime que la Cámara sólo se limita a efectuar una mera enunciación de las causales interpuestas por su parte, sin entrar a los fundamentos que hacen a cada motivo casatorio, limitándose a manifestar su improcedencia.

Alega que en el recurso de casación su parte puso en evidencia que la resolución en crisis se encuentra fundamentada de manera aparente y no es conclusión razonada del derecho vigente con particular referencia a las circunstancias comprobadas de la causa, por violación a los principios de razón suficiente, no contradicción, identidad y tercero excluido.

Entiende que todos surgen de la misma violación al razonamiento y contradicción evidente: el inferior sostiene que, a los fines de arribar a la conclusión, tomó como válida una pericia que a su propio entender es una pericia recipiente, con lo cual el *a quo* debió dar razones para considerar verdaderos los puntos de la misma. Asegura que la pericia contable en cuestión nada informó de ningún sistema contable; sólo informó sobre el sistema informático. De ello deriva no sólo la falta de congruencia sino también la parcialidad en el entendimiento de la misma.

Afirma que, siendo materia controvertida, ya que la actora acusa un corte arbitrario del servicio tendiente a un cambio en el precio pactado, y la accionada alega que el mismo deviene del uso indebido, el *a quo* debió justificar por qué asume la conclusión que rechaza la pretensión actora, bajo el riesgo de caer en falta de fundamentación.

Concluye que lo realizado por el tribunal inferior es una directa violación al derecho de defensa de su parte, al acceso a la justicia y al debido proceso legal.

Reitera en forma sintética las causales alegadas en el Recurso de Casación.

Solicita suspensión de la ejecución de sentencia y mantenimiento de la medida cautelar vigente. En orden a ello alega que, teniendo el recurso de casación efecto suspensivo (art. 388 del CPCC) y no estar establecido el efecto del directo en la ley, éste sigue la suerte del principal. Destaca la importancia de ello toda vez que el corte de servicio o el cambio de precio le perjudica especialmente y, por el contrario, su mantenimiento en nada afecta a la firma accionada, resultando evidente la imposibilidad de reparación ulterior del daño que ocasionaría a su representada y sus dependientes el cese de la medida cautelar dispuesta oportunamente.

Reitera reserva del caso federal.

## **Y CONSIDERANDO:**

### **I.LA QUEJA**

La queja ha sido deducida en tiempo oportuno, habiéndose acompañado copias autenticadas por el letrado patrocinante de la parte actora de las piezas procesales pertinentes (art. 402 del CPCC por remisión del art. 17 de la Ley n.º 4915) y el recurrente ha rebatido mínimamente en el escrito recursivo los argumentos de la denegatoria, motivo por el cual corresponde admitir formalmente la queja.

Abogados a su análisis es menester realizar un breve relato de las censuras contenidas en el recurso de casación, puesto que ello permitirá una mejor comprensión de los antecedentes de la causa para adentrarse en el examen acerca de la configuración de los vicios esgrimidos por el recurrente.

### **II. LA CASACIÓN: AGRAVIOS**

Los agravios de la casación, a los que encuadra bajo el motivo de violación al principio de fundamentación lógica y legal y de arbitrariedad, admiten la siguiente síntesis.

Sentencia dictada en violación a los principios de fundamentación lógica y legal (art. 383, inc. 1º, CPCC). Sostiene que el error invocado se manifiesta en cada punto de agravio que fuera motivo de la apelación.

Acusa que la resolución recurrida se encuentra comprendida entre aquellas que padecen una motivación defectuosa, en la variante identificada por la Corte Suprema de Justicia de la Nación como motivación aparente, careciendo de fundamentación lógica y legal por cuanto no respeta el principio de razón suficiente.

Denuncia que la Cámara tomó como válida una pericia que a su propio entender es una pericia recipiente, con lo cual debió dar razones para considerar verdaderos los puntos de la misma, toda vez que si la función del perito en tal caso es sustituir o complementar al tribunal en el acto perceptivo, debió dar razones de por qué es atendible el informe pericial, toda vez

que la pericia se limitó a informar lo relatado por la demandada, sin efectuar conclusiones que hagan valorable el mismo. Añade que la pericia contable en cuestión nada informó de ningún sistema contable, limitándose a informar sobre el sistema informático, con lo cual no sólo que se parte de un mero informe, sin justificar ni fundamentar, sino además porque dicho informe no reviste cualidades que le permitan considerarlo por sí mismo suficiente, y menos aún para con ello justificar o fundamentar la respuesta jurisdiccional en los términos del artículo 155 de la Constitución Provincial.

Expone que, siendo que la prueba pericial consiste tan sólo en un informe de la documentación y del sistema informático de la accionada, sin conclusiones basadas en la ciencia del perito, el *a quo* debió manifestar qué validez le otorga a dicho informe y en su caso, el motivo de tal extremo, por cuanto es justamente la materia controvertida, ya que su parte alega un corte arbitrario del servicio tendiente a un cambio en el precio pactado y la accionada acusa que el mismo deviene del uso indebido. Advierte que el perito nada dice respecto del mentado uso indebido y sólo se limita a expresar que le informaron que existieron disparos de alarma por tal motivo, pero para nada informa acerca de su comprobación; advirtiendo además que, de haber existido aquel, la demandada debió notificar a la autoridad de aplicación, lo que no surge acreditado en la prueba de autos.

Aclara que el agravio no consiste en que se valore la pericia contable, sino en que al ser ésta una pericia meramente informativa, le cabe al justiciante la obligación de fundamentación de los puntos que tomará como válidos a los fines de arribar a una conclusión, como modo de asegurar el principio de defensa, toda vez que el rechazo de la demanda deviene de tener por acreditado el uso indebido.

Esgrime que su parte nunca fue anoticiada del uso indebido que invoca la accionada, toda vez que consta la existencia de una carta documento tendiente a la comunicación y su no recepción, de lo que se desprende que la demandada no utilizó todos los medios suficientes para lograr la comunicación que pretendía, conformándose con el envío de la misma cuando

por su nivel y poder económico estuvo a su alcance el uso de acta notarial. Aduce que, de haber tomado conocimiento de que se le imputaba el uso indebido, le hubiera permitido encarar la presente acción en distintos términos.

Resume que los yerros lógicos que exhibe el fallo consisten en haber omitido analizar prueba trascendente para la dilucidación de la controversia, y haber fundado el temperamento en una falsa representación de la realidad del expediente, en particular del dictamen pericial. Tal razonamiento, afirma, ha privado al recurrente del conocimiento de las razones jurídicas que eventualmente enervarían su pretensión, mediante la utilización de argumentos que son sólo aparentes y que por ello no dan respuesta concreta a las cuestiones debatidas en la causa, violándose el precepto constitucional contenido en el artículo 155 de la Constitución Provincial y su correlato en la ley formal (art. 326 del CPCC).

Falta de valoración de la nota de f. 43. Sostiene que el *a quo* cae en arbitrariedad manifiesta toda vez que afirma que la accionada negó la existencia de un e-mail en el que se le proponía el cambio de servicio; y -alega- no hay en el informe obrante a fs. 74/80 párrafo alguno que niegue su existencia, y ella no ha sido negada a lo largo de la contestación efectuada por la demandada ni ha sido desvirtuado por prueba alguna.

Explica que el agravio aquí no consiste en la falta de valoración de dicha documental, sino que no se ha valorado prueba dirimente, toda vez que conforme se trabó la *litis*, su parte reclama que se le obliga a acceder al cambio en las condiciones de contratación, como condición para la continuidad del servicio oportunamente contratado, lo cual es negado por la accionada invocando un supuesto uso indebido a los fines de pretender justificar el cambio de condiciones de contratación, encubriendo así su maniobra tendiente al aumento de precio en la prestación del servicio.

Violación al principio de congruencia. Esgrime que lo sostenido por la resolución no refuta lo que ha sido motivo de alegación expresa de su parte y que se encuentra contenido en el escrito de la acción de amparo y en la documental acompañada. Explica que, además de la

incongruencia subjetiva (por exceso o defecto) existe una incongruencia respecto al material fáctico, que se da cuando se introduce en la decisión un hecho que la parte no aseveró o que si lo hizo no fue presentado del modo que se lo hace valer en la sentencia. Entiende que ello sucede con el *e-mail* de f. 43 que, a pesar de estar reconocido por el accionado, el *a quo* manifiesta una negativa al respecto.

Estima que la resolución impugnada comete un grave vicio en el proceder, al omitir mostrar las premisas de las que derivan sus conclusiones. Enfatiza que se han violado las formas y procedimientos para el dictado de la resolución al conculcar los principios de la lógica. Asimismo, sostiene que el razonamiento seguido para arribar a esa decisión se ha basado en la exclusiva voluntad del tribunal.

### **III. ADMISIBILIDAD DEL RECURSO**

Reseñados en estos términos los agravios fundantes del remedio extraordinario interpuesto, se logra advertir que la confrontación entre la resolución impugnada y los motivos casatorios desarrollados por el recurrente conducen al rechazo del recurso, conforme se desarrollará a continuación.

#### **a. Violación a los principios de fundamentación lógica y legal (art. 383, inc. 1 del CPCC)**

Bajo esta causal, el recurrente, señala que el *a quo* omitió analizar prueba trascendente para la dilucidación de la controversia, fundando su temperamento en una falsa representación de la realidad del expediente, en particular del dictamen pericial. A más de denunciar un error en el razonamiento haciendo especial referencia a la valoración y su disconformidad con relación a la pericia contable, realizada a partir de la documentación proporcionada por la actora sobre el sistema informático, objeta que el *a quo* debió manifestar qué validez le otorga a dicho informe y en su caso, el motivo de tal extremo. En definitiva, el accionante cuestiona la ausencia de justificación de la Cámara con relación al valor de la pericia efectuada.

Sobre ello cabe decir que, en principio, la tarea de reconstrucción de los hechos así como la valoración de la prueba y la determinación de la plataforma fáctica de la litis, lo que

forzosamente supone escoger entre diversos elementos asignándoles una determinada fuerza convictiva, no está sujeta al control en esta instancia, porque el recurso de casación no atribuye a este Tribunal competencia sobre la cuestión de fondo del litigio, materia que está reservada al examen privativo de los jueces de las instancias inferiores.

Así, es que en atención al agravio denunciado corresponde afirmar que el recurso de casación no puede ser acogido desde que los argumentos que han intentado fustigar el criterio sentencial del *a quo*, sólo traslucen la desavenencia con el resultado final al que arribara el tribunal de mérito, pretendiendo renovar en esta instancia extraordinaria una actividad que escapa a su naturaleza intrínseca por vincularse a la consistencia de la motivación y a la interpretación que se ha realizado sobre elementos fácticos y de prueba, mas no a un defecto en la construcción lógica de la misma. Es que los agravios alegados demuestran solamente que la parte impetrante manifiesta en definitiva una disparidad de criterio con relación a la valoración de la prueba pericial rendida en autos (fs. 210/213; 244/251) y de los hechos, como así también el correcto encuadre jurídico sustancial que fuera concretado por el tribunal *a quo*, cuestiones no revisables en esta instancia extraordinaria, ya que exceden la materia propia del recurso de casación por el motivo propuesto y que esta sede ha habilitado. En definitiva, la impugnación dirigida a cuestionar la pertinencia de la prueba pericial, importa un extremo que se encuentra relegado del estrecho margen cognoscitivo del recurso extraordinario local.

En ese sentido, este Alto Cuerpo, tiene dicho que *“La tarea de selección y valoración de la prueba se cumple por parte del Tribunal de Alzada, sin control alguno del Tribunal casatorio, ya que si este órgano pudiese indicar a la Cámara, cuáles son los medios probatorios más relevantes y cuál es el valor de convicción de cada uno, obviamente su función no consistiría en indagar si la sentencia está fundada o contiene vicios lógicos, sino en verificar el acierto intrínseco de los fundamentos, cometido que excedería por completo la tarea de fiscalización de las formas que le asigna el inc. 1º del art. 383 del CPCC”*<sup>[1]</sup>.

Por su parte, cabe tener presente que el interesado ha omitido designar un contralor técnico,

un auxiliar idóneo para advertir y/o develar irregularidades, inconsistencias, omisiones, etc., en las que supuestamente habría incurrido el perito oficial, demostrando qué técnicas debieron realizarse y no se concretaron y/o qué conocimientos especializados resultan exigibles al caso y no se tuvieron en cuenta. En este orden de ideas, mal puede el casacionista pretender en esta instancia la revisión de aspectos fácticos que implican una nueva selección y valoración de los hechos bajo el ropaje de ausencia de razón suficiente, cuando el *a quo* ha decidido de conformidad al material fáctico producido e incorporado en autos (fs. 17/45, 95/105, 113/154 ) y él no ha obrado con la debida diligencia probatoria arrimando al proceso aquellos elementos de prueba que pudieran acreditar fehacientemente la situación fáctica denunciada en el libelo introductorio.

#### **b. Omisión de valorar prueba dirimente**

Asimismo, el recurrente denunció que el *a quo* omitió valorar una prueba dirimente a los efectos de las resultas del juicio; siendo así, debió haber demostrado mediante el método de inclusión mental hipotético, su carácter concluyente, al grado de afectar de manera fundamental el razonamiento expuesto por el *a quo*. Tal actividad no ha sido manifiesta en los argumentos que sostiene el recurrente, en tanto solo se advierte que dicho cuestionamiento, a más de no corresponderse con una correcta factura lógico-argumental, no sería idóneo para lograr la admisión de la casación bajo esa causal. Es que siendo la materia controvertida excepción en esta instancia, su omisión debe ser real motivo de un déficit argumental y no, la derivación de la falta de diligencia probatoria del hoy recurrente; toda vez que no puede por esta vía extraordinaria purgar defectos u omisiones en la actividad probatoria que recaía pura y exclusivamente sobre el impugnante.

Tal labor no se ha concretado en el escrito impugnativo ya que en rigor, sólo se intenta imponer la propia y subjetiva visión de los interesados acerca de la valoración del dictamen pericial efectuado.

En este contexto, cabe advertir la improcedencia del remedio extraordinario cuando mediante



su articulación se intenta obtener un resultado que en el caso de autos, debería haberse procurado en la oportunidad procesal pertinente; pues lo que hoy se invoca como agravio ha sido motivo de consentimiento por el recurrente en las instancias de mérito. Ello es así, en atención a que el interesado no ha demostrado la diligencia procesal necesaria para precaver los efectos convictivos de la pericia contable -producida en la instancia pertinente- por los medios procesales previstos para tales fines (arts. 199 y 264 del CPCC). Es decir que en este estadio, y según las constancias de los presentes, no existe yerro alguno en el desarrollo argumental del fallo del *a quo* toda vez que la plataforma fáctica se ha determinado en función de los elementos probatorios introducidos por las partes, y a partir de los cuales, ese juzgado y la cámara han resuelto. En efecto, tal y como lo hizo notar el *a quo* “A su vez la parte contraria -hoy recurrente- además de las facultades que le acuerda la ley, en orden a la proposición de perito de control (art. 264 del CPCC) también puede objetar los puntos de pericia de quien la ofrece (arg. art. 199 CPCC) y proponer nuevos puntos o complementar los de la contraria. Sin embargo, el actor, nada hizo al respecto, limitándose una vez producida la prueba a impugnar en base a la falta de incumbencia del perito con relación al punto propuesto. Adviértase, que sobre tales extremos, el actor ha permanecido pasivo, sin ofrecer prueba sobre tales aspectos, si consideraba que la documental a consultar no ofrecía garantía suficiente” (considerando 5to.), siendo así el desenlace no puede ser otro que el rechazo del planteo.

### **c. Violación al principio de congruencia**

Igual suerte corre el embate propiciado con relación al agravio alegado bajo la causal de violación al principio de congruencia.

Adviértase que el recurrente insiste en cuestionar la selección y valoración de la prueba efectuada por el tribunal de mérito, en particular con relación al *e-mail* (fs. 76vta. y 77 del expediente principal n.º 1914786/36). Repárese que, nuevamente, trata de hacer caer por esta vía lo que ya fuera motivo de su consentimiento al no ofrecer prueba al respecto y/o mostrar

un rol eficaz al momento de las diligencias probatorias. A f. 43, obra una copia simple, y no existe ningún otro material respaldatorio que otorgue validez confirmatoria alguna a ese correo electrónico. Esa ha sido la inteligencia sostenida por el *a quo* al momento de determinar el valor convictivo de ese hecho al decir que “*sobre dicho extremo no se ha producido prueba alguna, por lo que no tiene mérito probatorio la mencionada nota*” (Considerando 6).

En este contexto y bajo la causal prevista en el inciso 1, artículo 383 del CPCC, el reproche debe exponerse de tal manera que sea susceptible de poner en evidencia algunos de los yerros formales del razonamiento allí expuesto. Lejos de ello, el recurrente pretende bajo esa causal una nueva selección y valoración del material probatorio, supuesto que se encuentra relegado de la competencia extraordinaria de este Tribunal Superior.

#### **d. Otras consideraciones**

A mayor abundamiento, cabe advertir que de las constancias de las resoluciones de los presentes, en particular la sentencia de primera instancia, surge que el tribunal de grado decide rechazar la presente acción de amparo con motivo de que la aludida arbitrariedad e ilegalidad del acto que se ataca, no se ha constatado de manera clara e incontrovertida, impidiendo así la admisión de la acción de amparo articulada. Supuesto este que no ha sido impugnado suficientemente en el embate recursivo ordinario (fs. 315/322vta.), recayendo la decisión del *a quo* en aspectos que no fueron completamente dirimientes a las resultas de la presente acción, sin dejar de mencionar que, según los términos en que se trabó la litis y de la prueba rendida en autos, sería necesario un mayor debate y prueba. Este ha sido el criterio seguido por este Tribunal, en el que en varias oportunidades dijo que “*la arbitrariedad, ilegalidad o ilegitimidad debe surgir manifiesta del acto cuestionado, ya que se frustra la procedencia del amparo cuando la arbitrariedad o ilegalidad que se invoca no surge con total nitidez, resultando por tanto ajenos a esta acción todas aquellas cuestiones que sean opinables o bien requieran de un mayor debate y aporte probatorio, excediendo por tanto las*

*posibilidades cognoscitivas propias de esta acción... ”<sup>[2]</sup>.*

Por todo ello, y a mérito de lo expuesto, corresponde rechazar el recurso de casación interpuesto por la actora, RYL SRL, en contra de AMX ARGENTINA SA (Claro), bajo la causal prevista por el inciso 1, del artículo 383 del CPCC, y en consecuencia confirmar la Sentencia n.º 67, de fecha 4 de junio de 2013, dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación.

#### **IV. COSTAS**

Atento el resultado arribado y las particularidades de la causa, se imponen por el orden causado (art. 130 del CPCC, y art. 26 *contrario sensu* de la Ley n.º 9459).

Por todo ello,

#### **SE RESUELVE:**

**I.** Admitir el Recurso Directo articulado en contra del Auto número Trescientos cincuenta y ocho, de fecha 6 de septiembre de 2013 por la Cámara en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación, y en consecuencia declarar mal denegado el recurso de casación interpuesto por la actora a fs. 386/397.

**II.** Rechazar el Recurso de Casación interpuesto por la actora, RYL SRL en contra de AMX ARGENTINA SA (Claro), con motivo de la causal del inciso 1, artículo 383 del CPCC, en contra de la Sentencia número Sesenta y siete, de fecha 4 de junio de 2013 dictada por la Cámara en lo Civil y Comercial de Cuarta Nominación (fs. 377/381).

**III.** Imponer las costas por el orden causado (art. 130 del CPCC).

**IV.** Remitir las presentes actuaciones a la cámara interviniente, a efectos de ser incorporadas al principal.

Protocolícese, hágase saber, dese copia y bajen.

---

[1] TSJ, Sala Civil y Comercial, Sentencia n.º 67 de fecha 16/6/2005, *in re* “Pellegrino”.

[2] TSJ, en pleno, Secretaría Electoral y de Competencia Originaria, Sentencia n.º 86, de fecha 19/9/2013 *in re* “Miranda”.

TARDITTI, Aida Lucia Teresa  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SESIN, Domingo Juan  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

RUBIO, Luis Enrique  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

BLANC GERZICICH de ARABEL, Maria de las Mercedes  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

CACERES de BOLLATI, María Marta  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

LOPEZ PEÑA, Sebastián Cruz  
VOCAL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA

SANCHEZ GAVIER, Humberto Rodolfo  
VOCAL DE CAMARA

LOPEZ SOLER, Francisco Ricardo  
SECRETARIO/A T.S.J.